LA CORTE CONSTITUCIONAL DECIDIÓ CONFIRMAR LAS SENTENCIAS DE INSTANCIA QUE AMPARARON EL DERECHO FUNDAMENTAL DE PETICIÓN DE LOS ACCIONANTES, DOCENTES DEL SECTOR OFICIAL, A QUIENES LAS ENTIDADES DEMANDADAS NO HABÍAN OFRECIDO RESPUESTA FRENTE A LAS SOLICITUDES DE RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LA SANCIÓN MORATORIA POR EL PAGO TARDÍO DE LAS CESANTÍAS.

VII. EXPEDIENTE T-7.182.312 AC- SENTENCIA SU-041/20 (febrero 6)

M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez

La Sala Plena revisó varios fallos de tutela proferidos con ocasión de acciones instauradas por educadores para lograr el cumplimiento de providencias judiciales que reconocieron su derecho al pago oportuno de las cesantías. Los demandantes, docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, solicitaron el reconocimiento y pago de las cesantías, parciales o definitivas, a que tienen derecho. Dicha prestación económica fue autorizada por las entidades competentes, pero pagada en forma tardía, esto es, por fuera del término establecido en la Ley 1071 de 2006.

Con arreglo a lo previsto en la Ley 244 de 1995, modificada a su vez por la Ley 1071 de 2006, los docentes interesados pidieron que se les reconociera la sanción moratoria por la cancelación tardía de las cesantías, equivalente a un día de salario por cada día de retardo. Dicho requerimiento se formuló, vía derechos de petición, al Ministerio de Educación Nacional -MEN-, al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio -FOMAG-, a la Fiduciaria La Previsora S.A. - FIDUPREVISORA S.A.- y a las distintas Secretarías de Educación territoriales certificadas a las que estaban adscritos.

En tres de estos casos, los docentes que activaron las acciones de tutela se orientaron a lograr el cabal cumplimiento de las decisiones judiciales adoptadas previamente en su favor, es decir, en sentencias dictadas por jueces administrativos que accedieron a las pretensiones bajo el medio de control nulidad y restablecimiento del derecho, disponiendo el pago de la sanción moratoria.

Debido a la falta de respuesta a las referidas peticiones, los accionantes, actuando en su mayoría por conducto de apoderados judiciales, presentaron acciones de tutela contra el MEN, el FOMAG, la FIDUPREVISORA S.A. y/o las Secretarías de Educación territoriales certificadas a las que estaban adscritos como docentes, solicitando que se ordenara a las entidades demandadas resolver de fondo sus peticiones.

Las mencionadas acciones de amparo se sustentaron en la presunta vulneración de los derechos fundamentales de petición e igualdad, sobre la base de que las entidades demandadas, hasta el momento, no habían ofrecido ningún tipo de respuesta, a diferencia de lo ocurrido con otros docentes en similares circunstancias, a quienes sí se les había dado contestación y, además, pagado efectivamente el monto correspondiente a la sanción moratoria, pese a haber radicado sus solicitudes con posterioridad. Los jueces de tutela de instancia decidieron proteger los derechos invocados por los accionantes, ordenando a las entidades demandadas responder de fondo y en un término perentorio las peticiones formuladas.

- **Aclaración de voto**

El Magistrado ALBERTO ROJAS RÍOS comparte la decisión de amparar los derechos de los docentes oficiales, así como de establecer un periodo de transición, para que FOMAG-FIDUPREVISORA S. A. cumplan con las obligaciones respecto a la sanción moratoria por pago extemporáneo de las cesantías.

Sin embargo, el magistrado ROJAS considera que el argumento principal para otorgar dicho periodo de transición radica en la capacidad presupuestal de las entidades para el presente año fiscal y no en las situaciones técnicas, operativas, financieras y administrativas de la entidad. La razón principal radica en que esta justificación podría implicar una confusión entre la finalidad de la acción de tutela (el amparo de los derechos fundamentales) y del incidente de impacto fiscal (garantía de la sostenibilidad fiscal de una entidad).

En ese sentido, debió indagarse por qué las entidades no ajustaron sus estructuras y procedimientos desde la sentencia SU-336 de 2017, lo cual causó el silencio respecto a los derechos de petición presentados por los tutelantes. Asimismo, el fallo debió realizar un juicio de proporcionalidad riguroso, que permitiese verificar cuál podría ser la afectación de los derechos de los docentes al reconocer el periodo de transición al FOMAG-FIDUPREVISORA.

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO
Presidenta